



## Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia](#).

### Usted es libre de:

**Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

### Bajo los siguientes términos:



**Atribución** — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.



**NoComercial** — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).



**SinDerivadas** — Si [remezcla, transforma o crea a partir](#) del material, no podrá distribuir el material modificado.

**No hay restricciones adicionales** — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

**Efectos de las tecnologías de la información aplicadas al sistema  
jurisdiccional colombiano y su eficacia en el ámbito procesal**  
**Effects of information technologies applied to the Colombian judicial system  
and its effectiveness in the procedural field**

David Felipe Bernal Rubiano<sup>1</sup>

**Resumen**

Con este artículo de investigación se busca demostrar como las Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC] representa, de manera general, impactos positivos en su implementación al sistema judicial colombiano. En sentido estricto, lo anterior se desarrolla respondiendo a la pregunta de investigación respecto a ¿cuáles son los efectos en términos procesales de la aplicación de las tecnologías de la información en el sistema de administración de justicia en Colombia? Se realizará un estudio acerca de la historia de las TIC en Colombia y los planes de acción que ha realizado el Estado con el fin de incorporar las tecnologías de la información en nuestro ordenamiento jurídico. Además, se estudiarán los derechos a la igualdad y acceso a la administración de justicia en el marco de la Estrategia Gobierno en Línea desarrollada a través del Decreto 1151 de 2008.

**Palabras claves:** Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC], derecho procesal, acceso a la justicia, justicia electrónica, Gobierno en Línea.

---

<sup>1</sup> Estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Artículo presentado como requisito parcial para optar al grado de abogado de esta Universidad.

## **Abstract**

This research article seeks to demonstrate how Information and Communication Technologies [ICT] represents, in a general way, positive impacts in its implementation in the Colombian judicial system. Strictly speaking, the foregoing is developed by answering the research question regarding what are the effects in procedural terms of the application of information technologies in the justice administration system in Colombia? A study will be carried out on the history of ICT in Colombia and the action plans that the State has carried out in order to incorporate information technologies into our legal system. In addition, the rights to equality and access to the administration of justice will be studied within the framework of the online government strategy developed through Decree 1151 of 2008.

**Key words:** Information and Communication Technologies [ICT], procedural law, access to justice, electronic justice, Online Government.

## **Sumario**

Introducción. 1. Conceptos generales de las TIC. 1.1. Antecedentes históricos de las TIC en Colombia. 1.2. Etapas significativas en el desarrollo de la tecnología entre los años 2000 y 2020. 1.3. Líneas estratégicas para la integración de las TIC. 1.3.1. Posibilidades que ofrecen las TIC al sistema judicial. 1.3.2. Recuento del desarrollo del sistema judicial en Colombia entre los años 2000 y 2019. 1.3.3. Avances sustanciales en materia procedimental: el valor probatorio de la firma electrónica y el derecho de privacidad y protección de datos personales. 2. Efectos

de un sistema judicial parcialmente virtual respecto a la eficacia y velocidad del tráfico de la información en el sistema de administración de justicia. 2.1.

Implementación de las TIC en el sistema judicial. 2.2. Efectos de un sistema judicial parcialmente virtual. Conclusiones. Referencias.

## **Introducción**

En primer lugar, es necesario hablar del concepto tecnología de la información, el cual se divide en varios aspectos. Inicialmente se define la «informática» como la ciencia que automatiza métodos y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos de manera digital, esto a través de técnicas de codificación binaria. Es importante mencionar que el creador del código binario fue el filósofo Francis Bacon, quien reemplazó letras en secuencias numéricas compuesto de unos y ceros. Posteriormente a la creación del código binario, el matemático Charles Babbage creó un chasis de cifras con el fin de solucionar problemas lógicos y aritméticos los cuales eran formulados por medio de algoritmos (Serna, 2010).

Consecuentemente, con la aparición de los computadores en los cuales se podía contar con una unidad de almacenamiento lógico, un procesador de información más rápido, una memoria de velocidad RAM y la inclusión de una interfaz gráfica, más la aparición de componentes como teclado, pantalla y ratón, generaron al usuario una experiencia enriquecedora, de tal forma que podían realizar operaciones de toda clase y acceder por medio de esta herramienta a

Internet, creada en la década de 1970, siendo la base de todas las tecnologías creadas por el ser humano hasta el día de hoy (Chávez, 2007).

Ahora bien, la creación del Internet y la conectividad global ha permitido a esta tecnología ir abriendo paso a la creación de varios dispositivos y componentes de software, generando cambios significativos en el modo de codificar y transmitir la información a masas de personas en todo el mundo. En este orden de ideas, el Estado se tuvo que moldear en razón a las nuevas tecnologías de la información presentes, razón por la cual, se han ido adaptando las instituciones a un nivel tecnológico por medio de internet, con el fin de que los ciudadanos puedan acceder de manera más rápida a los servicios digitales, agilizando los trámites y la información que necesitan (Chávez, 2007).

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente, es importante determinar el impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [TIC] en la administración de justicia. En consecuencia, se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál ha sido la incidencia que ha tenido en la administración de justicia colombiana, la aplicación de las tecnologías de la información en sus ámbitos procesales?

El objetivo principal de este artículo es generar argumentos jurídicos que soporten lógicamente la necesidad de la implementación de las TIC, al sistema judicial colombiano, de tal forma que, el Estado, brinde las herramientas necesarias, para realizar trámites y procedimientos del común a través de Internet.

## **1. Conceptos Generales de las TIC**

Las TIC son un conjunto de herramientas para generar, utilizar y tratar la información por medio de dispositivos electrónicos conectados a la internet y las telecomunicaciones, a través de su almacenamiento y transferencia. En este orden de ideas, es importante resaltar la característica principal de las TIC, la cual se establece en que, en cualquier momento se puede tener acceso a la información con solo tener una conexión de internet, lo cual se traduce en mejor gestión del tiempo, más productividad, receptividad y alcance al momento de realizar diferentes tareas (Calzadilla, 2002).

Ahora bien, una vez comprendido el concepto de las TIC, es relevante dar cuenta de su evolución hasta el día de hoy, empezando por la década de los setenta. Es para esta época, cuando surge la primera computadora, dispositivo primordial para las TIC, cuya configuración correspondía a una fusión de software (código binario), hardware (componentes electrónicos). Luego, con la aparición del Internet, antes conocido como ARPANET o Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, se generó un sistema de conexión global consistente en una red de computadores interconectadas entre sí, facilitando con su uso la comunicación entre usuarios.

Se reconoce entonces que, desde entonces, la unión de estas tecnologías ha facilitado el acceso a la información, ya que cualquier persona con acceso a un ordenador y conexión, tiene a su disposición el acceso a millones de páginas web donde se aloja esta información. En este sentido, la aparición de la informática y la

computación creó una revolución tecnológica que transformó el mundo, al desencadenar un cambio sustancial en la vida de los seres humanos, impactando de manera positiva en el crecimiento económico, social y cultural.

### **1.1. Antecedentes históricos de las TIC en Colombia**

En el Estado colombiano es a partir de la Constitución Política de 1991 que, se crearon e implementaron principios para la protección y el libre acceso a la información y las telecomunicaciones. Además, se fijó el derecho de las personas a la intimidad, recolección de datos y libertad de expresión, tal y como se puede observar en los siguientes artículos de la Carta Política:

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. (Constitución Política de Colombia [Const.], 1991, art., 15)

Tal y como se puede apreciar en el artículo anterior, el Estado desde su Carta Magna establece parámetros acerca de los derechos de las personas respecto a las comunicaciones y el tratamiento de la información. En consecuencia, se presenta lo dispuesto en el artículo 20 el cual a la letra establece:

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. (Const., 1991, art., 20)

A tenor de lo anterior, se puede establecer que el Estado al garantizar la libertad de expresión y la difusión de información en medio masivos de comunicación, proporciona las herramientas necesarias para brindar un sentido de responsabilidad social sobre la libre difusión de pensamiento, fortaleciendo de esta manera la democracia (Pan, 2018).

Así mismo, posteriormente a la expedición de nuevas tecnologías, después de la década de los años 90, el Estado tuvo la necesidad de regular la información del espectro, con el fin de contribuir en el desarrollo de las comunicaciones y con esto mejorar la calidad de vida de los ciudadanos colombianos (Banda, 2002).

De igual manera, se dieron lineamientos acerca de las políticas que se debían aplicar en el ámbito de las TIC con el fin de determinar la gestión y desarrollo que se debe tener según las recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes (Guerra y Oviedo, 2011).



## **1.2. Etapas significativas en el desarrollo de las TIC entre los años 2000 y 2020**

Desde el año 2000 hasta la fecha, se ha presentado un desarrollo exponencial de crecimiento tecnológico del cual se mencionarán los aspectos más destacados. En primer lugar, está la expansión del buscador más importante en el mundo, Google, fundado en el año 1998. Hoy en día, Google no solo actúa como buscador, sino que también ha creado diferentes aplicaciones tales como, la plataforma virtual de videos más grande del mundo, YouTube.

En segundo lugar, la aparición de la banda ancha, con la innovación del ADSL revolucionó la forma de transportar la información de manera más efectiva (Martín y Aguiar, 2004). Hoy en día la mayoría de los usuarios pueden llegar a adquirir el servicio de fibra óptica la cual llega a velocidades de hasta 100 megabytes por segundo, permitiendo al usuario una experiencia más rápida de acceso a páginas, descargas de información y transferencia.

Con base a lo anterior, se crearon las redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, las cuales a través de vinculaciones de redes y subredes nos permiten compartir información, fotos y videos entre otros, lo cual ha permitido generar un fenómeno de tráfico de información en tiempo real, siendo realmente útil para mantenerse informado, mejorando así, la calidad de vida de las personas.

En el año 2009 Jan Koum y Brian Acton crean WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea que se utiliza a través de teléfonos inteligentes por medio del internet, revolucionando la industria tecnológica; en la actualidad, esta red social cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo (Alotaibi, Alruban, Alotaibi, Alshumrani y Altamimi, 2019).

En el auge de todas las tecnologías, la empresa Apple, de la mano de Steve Jobs, creó en el año 2007 el iPhone, dispositivo que consta de un sistema operativo IOS, el cual permite conectarse a internet enlazando el correo electrónico y aplicaciones de mensajería instantánea, entre otras plataformas. Esto, expandió el dominio del teléfono a otras categorías, siendo hoy en día Android y IOS las plataformas de software por defecto, por lo que las grandes empresas tecnológicas empatan con dichas plataformas, creando uniones comerciales que han favorecido un crecimiento amigable para cada desarrollador (Greene y Shilton, 2018).

Con referencia a lo anterior, es necesario resaltar que todos estos avances tecnológicos fueron moldeando la sociedad en su forma de vivir, razón por la cual esta se ha adaptado en cuestión de años a muchos cambios que han permitido vivir con un flujo de información cada vez más alto, siendo así, que en tiempo real se logra tener acceso a la información a través del internet y las diferentes aplicaciones que se pueden disfrutar en los dispositivos electrónicos.

### **1.3. Líneas Estratégicas para la integración de las TIC en Colombia**

En Colombia, se han integrado a la gestión de la administración pública las Tecnologías de la Información de manera creciente a lo largo de las últimas décadas que, como se mencionó anteriormente, se realiza en el contexto de una Constitución Política la cual promueve el uso de las TIC con el fin de aminorar las brechas sociales.

Con la expedición de la Ley 715 de 2001 y con el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el Estado manifestó que las TIC permitían extender el alcance de la información a sectores vulnerables de la sociedad del país (Desantes, J. 2004).

El Estado colombiano viendo el incremento de flujo de personas accediendo a las TIC, desarrolló la Ley 1341 de 2009, mediante la cual le brindo al país un marco legal en el cual se podía desarrollar las TIC, en tanto que esta promueve la accesibilidad y su uso protegiendo los derechos de los usuarios, además de la creación de la Agencia Nacional del Espectro, institución que proporcionó infraestructura, regulando y vigilando el espectro radioeléctrico de Colombia (Becerra, Cotino, García, Sánchez y Torres, 2015).

#### ***1.3.1. Posibilidades que ofrecen las TIC al sistema judicial***

A través de los años se han implementado las TIC al sistema judicial colombiano, por medio de acuerdos que se mencionarán en los siguientes capítulos

de este artículo, permitiendo un avance importante en cuanto a la virtualización parcial de la rama judicial, la cual expresa en su plan estratégico, al tenor literal, lo siguiente:

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es consciente de la relevancia que tienen las Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC para modernizar la Administración de Justicia, entendiendo por modernización un servicio de justicia formal más eficiente, más efectivo, más transparente y con mayores facilidades de acceso para la ciudadanía (Consejo Superior de la Judicatura, 2012, p. 6).

En este sentido, se creó una estrategia integral que ha permitido a la Rama Judicial de Colombia establecer acuerdos a través de los años, los cuales han impulsado un crecimiento gradual de adaptabilidad e inclusión de las TIC, en el marco, además, de la discusión respecto al reconocimiento del acceso al Internet a título de derecho fundamental (Valderrama, 2018).

Ahora bien, una vez mencionados los acuerdos de manera general desarrollados por la rama judicial para ser incluidos en el sistema judicial es preciso entrar a determinar que se contempló dentro de esos acuerdos, su desarrollo y cambios al sistema judicial.

### ***1.3.2. Recuento del desarrollo del Sistema Judicial en Colombia entre los años 2000 a 2019***

En primer lugar, la rama judicial tiene como función principal brindar e impartir justicia en el Estado colombiano, de a la misionalidad de cada entidad u

órgano institucional perteneciente a esta. Tradicionalmente, se ha brindado una experiencia de atención ciudadana presencial en los despachos directamente, lo que hace dos décadas era algo funcional, debido que no se contaba con herramientas tecnológicas que permitieran un trámite diferente; sin embargo, con la masificación de las TIC es inevitable que el componente tecnológico sea parte del sistema (Ramírez, 2019).

Para las dos últimas décadas, gracias a la implementación de las TIC, el Estado ha logrado de manera eficaz fijar estrategias de crecimiento tecnológico, lo cual ha permitido al ciudadano realizar trámites desde la comodidad de su casa, generando así un ahorro no solo significativo de tiempo, sino también de recursos para el Estado, dado que al realizar los trámites de manera virtual se evita el consumo de recursos.

Lo anterior, ha influido en una institucionalización virtual de entidades y órganos del Estado, generando por medio de esta implementación un régimen de transición, por medio del cual se virtualizo de manera breve la forma de atención a los usuarios.

Continuando con lo previamente expuesto, es por medio de diferentes acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, como órgano institucional encargado de desarrollar en su división de sistemas de información y comunicaciones, que se han expedido los lineamientos necesarios para el desarrollo, adaptabilidad e implementación de las TIC en el sistema judicial colombiano (Ortega, 2018).

Ante la situación planteada sea relevante exponer y desarrollar de manera explícita los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, creando así un esquema sistematizado de acuerdos que permita dar cuenta del avance en lo que se conoce del sistema judicial en la actualidad.

El Consejo Superior de la Judicatura, ha elaborado en las últimas dos décadas varios acuerdos que fueron determinando la dirección de las políticas y administración de las TIC en el sistema judicial, objeto para el que se ha elaborado el siguiente recuento histórico.

#### ***1.3.2.1. Acuerdo No. 718 del 8 de febrero de 2000***

El objeto principal de este acuerdo fue establecer los parámetros de uso del correo electrónico utilizado por los miembros de la rama judicial, con el fin de llevar un control más estricto de las cuentas allí creadas y del tráfico de información que podía administrar el servidor del Centro de Documentación Judicial [CENDOJ].

#### ***1.3.2.2. Acuerdo No. 755 del 6 de abril de 2000***

Cambió el dominio registrado de la página de la rama judicial por [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co), también implementó, un sitio web que permitía a los ciudadanos acceder a la consulta y revisión de procesos de carácter jurisdiccional, proporcionando cierta información del proceso en un sentido estricto, resultando

útil para las partes interesadas, toda vez que las partes por cuestiones de desplazamiento, se les dificultaba revisar físicamente el estado de estos.

Es de recalcar que el alcance de la página respecto a la capacidad de subir contenido en línea siempre ha sido deficiente, ya que, con la creación masiva de juzgados en el país, no se logra que la pagina sea actualizada efectivamente añadiendo toda la información de cada uno.

#### ***1.3.2.3. Acuerdo No. 2189 del 12 de noviembre de 2003***

Se permitió al sindicato participar en las audiencias públicas de manera virtual, según procedimientos y requisitos establecidos.

#### ***1.3.2.4. Acuerdo No. 6978 del 17 de junio de 2010***

Se crea el Comité de Gobierno en Línea de la Rama Judicial, el cual garantiza la adecuada implementación de la estrategia de Gobierno en Línea con el fin de brindar una atención más eficiente al ciudadano colombiano, proporcionando mejoras a los servicios mediante el aprovechamiento de las TIC.

#### ***1.3.2.5. Acuerdo No. PSAA13-9858 del 7 de marzo de 2013***

Permitió la unificación del portal web de la rama judicial en tanto institucionaliza corporaciones y despachos judiciales en el país.

Los anteriores fueron los acuerdos más relevantes creados por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales han permitido que el ciudadano tener acceso a trámites y servicios de manera virtual, agilizando así el procedimiento, brindando derechos y garantías al implementar las TIC, según los lineamientos estratégicos del Estado.

***1.3.3. Avances sustanciales en materia procedimental: el valor probatorio de la firma electrónica y el derecho de privacidad y protección de datos personales***

La firma electrónica, en la Resolución 00070 de 2016 expedida por Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), se define como la combinación entre una serie de datos en forma electrónica que mezclan la identidad con códigos electrónicos. En otras palabras, la firma electrónica permite una identificación del contribuyente lo cual facilita el cumplimiento de las obligaciones.

De otra parte, el Estado colombiano define la privacidad y protección de los datos personales de las personas en la Ley 1581 de 2012, la cual manifiesta que el Estado reconoce y protege el derecho de cada persona en conocer, actualizar y rectificar la información recolectada de ellas en las bases de datos, la cual sea susceptible de dicho tratamiento, sin diferenciar si se tratare de entidades públicas o privadas (Rojas, 2014).



Ahora bien, los datos personales son todos aquellos datos relacionados con una persona la cual conlleva a una identificación y en algunos casos puede contener información más sensible de la persona como puede ser su vida sexual, como es su apariencia, sus preferencias políticas, entre otros (Chaparro, 2014).

La información personal se recolecta de diferentes maneras, dado que en ocasiones se deben diligenciar formularios o formatos con este tipo de información ya sea cuando se quiere comprar algo a través de internet, solicitar un préstamo al banco o crear un correo electrónico, las plataformas virtuales alimentan sus canales de información para generar un mayor crecimiento.

La normativa indica que, para poder recolectar los datos de las personas, es necesario la autorización previa del titular de la información, es por ello que los responsables deberán al momento de solicitar la información detallar y especificar la política de tratamiento de datos personales a los que se verá sometida su información, al igual que su uso, circulación y supresión de las bases de datos.

## **2. Efectos de un sistema judicial parcialmente virtual respecto a la eficacia y velocidad del tráfico de la información en el sistema de administración de justicia**

Partiendo del análisis anterior es claro precisar que las TIC son una herramienta clave para los ciudadanos, demostrando efectos positivos en lo que concierne a la relación ciudadano-administración. La proyección que tuvo el

Estado colombiano fue, aunque un poco lento, acertado, en la medida que se fueron tomando políticas sanas y adecuadas para ir dotando al sistema judicial de las herramientas tecnológicas necesarias para una práctica efectiva.

Estos esfuerzos sistemáticos de las últimas décadas han permitido el desarrollo y avance de plataformas virtuales de la rama judicial las cuales permiten al usuario acceder a la información de manera casi inmediata. Plataformas como la página web para revisar el estado electrónico de los procesos judiciales, plataforma de estados en línea de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio entre otras, permiten que el sistema jurisdiccional se mantenga en una constante vía de alimentación de la información en tiempo real, que permiten seguir desarrollando con el plan de políticas estratégicas del Estado colombiano iniciativas concretas de progreso tecnológico en el país (Pulido, Arce y Silva, 2013).

No obstante, para la administración de justicia la adaptación e implementación de las TIC, ha permitido una institucionalización estable que, otorga una continuidad en los procesos de desarrollo digital, lo cual genera herramientas para los servidores públicos, ampliando así su campo laboral, aumentando su productividad mediante las TIC, al igual que la efectividad de sus funciones (Días y Costa, 2008).

En síntesis, la implementación de las TIC, ha permitido al Estado generar nuevos canales de respuesta de atención ciudadana, garantizando así el acceso a la información, reducción de tiempo para la realización de trámites que se pueden

hacer vía Internet e incentivar al pueblo colombiano por medio de políticas estratégicas a participar activamente de la función pública.

De igual manera, ha permitido incrementar la productividad de los funcionarios públicos a través de las políticas estratégicas de implementación de las TIC, las cuales han garantizado la competencia a nivel nacional, expandiendo su alcance a poblaciones donde antes no tenía presencia, reduciendo costos y mejorando sus servicios.

## **2.1. Implementación de las TIC en el sistema judicial**

Hoy el sistema judicial se encuentra en una etapa de crecimiento de la mano de las TIC que, con su implementación ha logrado aumentar de manera considerable la productividad de sus servicios en tanto que permite una descentralización de servicios y procesos, que disminuyen costos operativos y tiempo, permitiendo que los procedimientos sean más eficaces (Guevara y Ríos. 2020).

También ha generado una optimización de tecnologías intersectoriales, lo cual conduce a una gestión judicial más oportuna, ya que, con el desarrollo de sistemas y plataformas virtuales de información, se han mejorado los sistemas de respuestas de decisiones judiciales, reduciendo costos, proporcionando transparencia y garantizando al ciudadano el acceso a la información. En este sentido, se refleja por parte del Estado, mayor transparencia e independencia en la prestación del servicio.

Así entonces, el avance presentado hasta la fecha ha permitido desarrollar una interoperabilidad entre diferentes instituciones del sector judicial, generando un cambio estructural productivo, el cual ha revolucionado la forma de administrar y aplicar la justicia en nuestro país.

Esta integralidad de las TIC, ha generado un despliegue de políticas y estrategias que desde las últimas décadas en Colombia se está implementando, en función del plan de modernización tecnológica el cual busca una armonía entre los diferentes niveles de despachos judiciales, mejorando la calidad del servicio en favor del ciudadano.

De otra parte, debido a la pandemia, y teniendo en cuenta que la Constitución Política, al tenor del artículo 215, otorga al Presidente de la Republica, la facultad de dictar decretos legislativos, que cumplan los requisitos formales y materiales previstos, se identifica la expedición de decretos como el 806 de 2020, el cual modifico los estatutos procesales, con la finalidad de eliminar las barreras que imposibilitaban el trámite procesal de manera virtual.

## **2.2. Efectos de un sistema judicial parcialmente virtual**

En primer lugar, la implementación de las TIC ha demostrado una adaptabilidad y eficacia compatible con las directrices del Estado. Por medio de las políticas que se fijaron en las últimas décadas en Colombia, actualmente es posible realizar búsquedas de procesos vía internet, acceder a información detallada del proceso a nivel nacional, notificar vía correo electrónico, así como

también se puede acceder a estas plataformas tecnológicas que brindan la posibilidad de garantizar un correcto uso de la información (Pastrana, 2016).

En este orden de ideas, es necesario validar los efectos de un sistema judicial parcialmente virtual en Colombia, precisando la mención de que el Estado, por medio de líneas de acción tomadas hace más de 20 años, ha proporcionado al ciudadano la posibilidad de acceder a la administración de justicia de manera virtual, aumentando en consecuencia la productividad del sistema de información del sistema judicial, incrementando a su vez la transparencia en los procesos (García y Sánchez, 2016).

Lo anterior ha fomentado el crecimiento de la participación ciudadana, al generar más interacción, así como también ha generado llegar a más personas de todo el territorio nacional de manera descentralizada, sin gastos considerables de infraestructura, agilizando procesos, tramites en línea y fomentado una cultura de servicios digitalizada (Cepeda y Otálora, 2020).

Respecto de la aplicabilidad de un sistema virtual total en el sistema de administración de justicia, no deja de ser un reto cuestionarse acerca de cómo configurar en un plano digital, la adaptación de la técnica judicial de los despachos judiciales, así como también, la forma en la cual se revisarán los expedientes y la forma en que las partes interesadas podrán realizar las acciones de manifestación de la voluntad en un ámbito digital.

La implementación de un sistema virtual en el sistema de justicia colombiano durante los últimos 20 años, ha pasado a segundo plano, dando

prioridad a otros temas de interés para el Estado. Sin embargo, a raíz de la pandemia de COVID 19, establecida a nivel mundial, a principios de 2020 la necesidad de implementación de la virtualidad total en todas las instituciones se volvió imperativa.

Un ejemplo claro de adaptabilidad de la virtualidad en el sistema judicial colombiano fue con la creación del Decreto 398 del 13 de marzo del 2020 el cual reglamentó las reuniones no presenciales de juntas de socios y asambleas generales de accionistas. Con esto se evidencia que la aplicabilidad de esta nueva forma de reunión se protege la salud de las personas y al mismo tiempo permite su validez, proporcionando un estado de legalidad.

Otro ejemplo claro es el Decreto 460 del 22 de marzo de 2020 el cual ordenó disponer de medios telefónicos y virtuales para brindar asesoría y orientación en la atención de los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales, a cargo de las comisarías de familia. En esta normativa, es evidente la finalidad del Estado, de garantizar y dar continuidad a las operaciones administrativas y judiciales en el país, implementando protocolos de recepción de denuncias a través de medios virtuales y telefónicos.

Esta transición y adaptabilidad con la implementación de las TIC, estructuró cada institución y órgano del Estado, en cuestión de semanas, lo cual produjo un resultado positivo en el avance tecnológico que se había venido desarrollando a través de las políticas proyectadas para esta materia, generando un estado de derecho virtual, con celeridad y eficacia que respeta los derechos de la población.

En consecuencia, el Gobierno Nacional de Colombia implementó un estado de emergencia económico, social y ecológica en el país, adaptando medidas con la creación y aplicación de normas para la continuidad jurídica en todo el territorio nacional, tales como las mencionadas anteriormente. En función de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 806 de 2020, el cual brinda los principios rectores de la implementación de las tecnologías de la información facilitando el acceso a la justicia a través de medios virtuales, dándole el trámite respectivo a los procesos judiciales en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo.

En este decreto, se establecen medidas de implementación de las tecnologías de la información en los procesos judiciales del país, con la finalidad de mantener la continuidad en la prestación de los servicios de justicia, así como también, busca proporcionar y facilitar por medio de los municipios y personerías, acceso a sus sedes con el fin de participar en las actuaciones virtuales en el país.

Adicionalmente, se busca agilizar las notificaciones judiciales utilizando preferentemente los medios tecnológicos, y utilizando estos para todas las actuaciones dentro del proceso, lo cual garantizara no solo una mayor celeridad de esta etapa procesal, sino también permitir a todos los litisconsortes acceder a la justicia. En este sentido, no solo las actuaciones procesales se notificarán de manera digital.

Ahora bien, la presentación personal de los poderes se podrá conferir a través de mensaje de datos, sin necesidad de firma, se presumirán auténticos y no

requerirán de ninguna presentación personal o fe de un tercero para ser admitidos dentro del proceso a que diere lugar, evitando costos y siendo más funcional para las partes.

Los Juzgados, congestionados de procesos y con falencias en atención al público, ahora, con el Decreto 806 de 2020, se implementaron, nuevos trámites y servicios a través de portales web e internet, permitiendo simplificar, el flujo de información, reduciendo tiempos de respuesta.

Con base a lo anterior, el Estado, al implementar esta normativa, garantiza el acceso a la justicia, desde un plano nunca visto en nuestro país, un plano simple y renovado que descongestiona el flujo de la información en el sistema judicial, la practica procesal brindando al pueblo de herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia en nuestro país, como lo son plataformas unificadas de consulta de procesos en tiempo real, que permiten al usuario, acceder a la información de las publicaciones con efectos procesales de manera oportuna.

## **Conclusiones**

En primer lugar, es relevante mencionar el plan nacional de las TIC que abarco el Estado, desde hace dos décadas, fijo las políticas de gobierno, acciones y proyectos encaminados a la inclusión, adaptabilidad y desarrollo de las tecnologías de la información aplicadas al sistema de administración de justicia, esto, sujeto al avance tecnológico de la década y las invenciones tecnológicas, las cuales eran



limitadas, ya que, con la creación del Internet y los dispositivos electrónicos, se aceleró de manera exponencial el interés del Estado, en proyectarse sobre la virtualización institucional.

El Estado, empezó a implementar las TIC, inicialmente con la creación de la página web de la rama judicial en la cual se virtualizaron los despachos judiciales, tribunales y altas cortes a nivel nacional, mostrando a través del portal de internet información relevante con efectos procesales, permitiendo, el alcance de la información a más personas en el país, agilizando de esta forma, la prestación del servicio, siendo más ágil, con celeridad y oportuna.

Para concluir este primer punto, aunque en perspectiva fue un poco lenta la aplicabilidad de estas políticas, el avance tecnológico de la década de los 2000, y la infraestructura, no era suficiente para un óptimo ejercicio de búsqueda. No obstante, posteriormente, con la creación de la Ley 1341 de 2009 el Estado se encamino en un eje de acción más activo, logrando un ejercicio eficiente de acceso a la información en la función judicial en el país, brindando una experiencia de uso aceptable.

El segundo aspecto es sobre la importancia de las tecnologías de la información y el papel que tiene el Estado, es permitir su uso y proteger los derechos de las personas, ya que el brindar la posibilidad de realizar algún tipo de trámite judicial a través de internet, se requiere un sistema de seguridad, el cual fue mejorado con la implementación del portal web de consulta unificada de procesos a nivel nacional.

Esta implementación de normativas y procedimientos que ha adoptado el Estado, ha sido un reto a nivel de infraestructura, flujo de procesos y directrices que ha desempeñado de manera decidida para llevar a cabo el funcionamiento óptimo y oportuno de las plataformas virtuales, dimensionando una estandarización de procesos que han permitido al día de hoy, un uso continuo de dichos servicios a través de internet.

De igual manera, el Estado, a través de la incorporación de las TIC permitió que cada acto y etapa procesal dentro de los procesos judiciales pudiera seguir su curso normal con la ayuda de herramientas tecnológicas, dando continuidad al sistema de justicia, toda vez que las audiencias y demás actuaciones procesales, las cuales antes se debían realizar de manera presencial, fueron reemplazadas por las reuniones en diferentes plataformas tecnológicas que permiten reunirnos a través de Internet.

El Estado, a través de la inclusión digital, ha centralizado de manera profunda la fundamentación teórica de este derecho, reconociendo deberes, derechos y obligaciones, mejorando constantemente condiciones estructurales y de funcionamiento, que a la fecha han permitido un normal desarrollo de las actuaciones procesales en el país.

A la fecha, se cuenta con un sistema judicial virtual, el cual ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos colombianos. Lo anterior, toda vez que la virtualidad estuvo obligada a ser implementada, tomando mayor fuerza y estabilidad, proporcionando en esta situación de emergencia sanitaria, servicios en

línea que permiten ahorro de costos para el Estado. Dotado de infraestructura suficiente y en crecimiento constante, hoy se permite consolidar un sistema judicial virtual, el cual garantiza el debido proceso, generando descongestión y aumentando la productividad de la rama judicial.

Como se mencionó anteriormente, la pandemia, obligo al Estado, a acudir a las Tecnologías de la Información, con el fin de garantizar la prestación y continuidad de los servicios judiciales en el país, protegiendo derechos, aumentando el nivel de interés del Gobierno en apoyar el plan estratégico de transformación tecnológico.

Con la creación de los mandatos legales ajustados a lo establecido en el plan de justicia digital y con los principios establecidos en los decretos legislativos, en especial, el Decreto 806 de 2020, el cual sobresale, en la medida de brindar instructivos claros de operabilidad técnica y jurídica que generan una dirección clara de las intenciones del Estado, para la debida adaptabilidad de la operación de la justicia virtual en Colombia, la cual, hoy, es una realidad y esta predeterminada por defecto a quedarse.

## **Referencias**

Alotaibi, S., Alruban, A., Alotaibi, M., Alshumrani, A., & Altamimi, A. (2019). A New User-Apps Interactions Dataset for Behavioral Profiling Using

Smartphones. *Journal of Internet Technology and Secured Transactions (JITST)*, 7(1), 631-641.

Banda, A. (2002). Algunas consideraciones sobre derecho a la información y la “ley de prensa”. *Revista de Derecho*, 13, 123-145.

Becerra, J., Cotino, L., García, C. B., Sánchez, M. E., & Torres, J. (2015). *La responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Calzadilla, M. E. (2002). Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información y la comunicación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 29(1), 1-10.

Cepeda, M. J., & Otálora, G. (2020). *Modernización de la administración de justicia a través de la inteligencia artificial*. Bogotá: Fedesarrollo.

Chaparro, M. F. (2014). Legislación informática y protección de datos en Colombia, comparada con otros países. *INVENTUM*, 9(17), 32-37.

Consejo Superior de la Judicatura [CSJ]. (2012). *Plan Estratégico Tecnológico Rama Judicial de Colombia*. Bogotá: CSJ.

Chávez, J. V. (2007). *Origen y evolución de periféricos de computadora*. Pachuca de Soto: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Desantes, J. (2004). *Derechos de la información y comunicación pública*. México: Universidad del Occidente.

Dias, M., & Costa, J. (2008). Impacto psicosocial de la tecnología de información y comunicación (TIC): tecnoestrés, daños físicos y satisfacción laboral. *Acta Colombiana de Psicología*, 11(2), 127-139.

García, H. J. y Sánchez, J. C. (2016). *Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información que ayude al cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública*. (Artículo presentado como requisito para optar al grado de ingeniero de sistemas). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Greene, D., & Shilton, K. (2018). Platform privacies: Governance, collaboration, and the different meanings of “privacy” in iOS and Android development. *New Media & Society*, 20(4), 1640-1657.

Guerra, M., & Oviedo, J. (2011). De las telecomunicaciones a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341/09). *Serie Estudios y perspectivas – Colombia*, 22. Bogotá: Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL].

Guevara, L., & Ríos, C. (2020). Implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en los consultorios jurídicos en Colombia. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 9(2), 73-104.

Martín, M. A., & Aguiar, M. V. (2004). Indicadores del desarrollo e implantación de la sociedad de la información: un capítulo pendiente. *Pixel-Bit: Revista de Medios y Educación*, 22, 67-82.

Ortega, L. (2018). *El acto administrativo en los procesos y procedimientos*.

Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Pan, J. (2018). *Breve reseña del derecho a la información*. Montevideo:

Observatorio Mercosur.

Pastrana, A. (2016). *Notificación electrónica en la jurisdicción contenciosa*

*administrativa y su régimen jurídico*. (Artículo presentado como requisito

para optar al grado de abogado). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Pulido, J., Arce, J., & Silva, A. (2013). El derecho a la información en Colombia:

una aproximación al estado de la información desde el derecho y los

archivos. *Equidad Desarrollo*, 1(19), 161-190.

Ramírez, P. A. (2019). *Las TIC'S como instrumentos que garantizan la celeridad*

*procesal en Colombia*. (Artículo presentado como requisito para optar al

grado de abogada). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Rojas, M. (2014). Evolución del derecho de protección de datos personales en

Colombia respecto a estándares internacionales. *Novum Jus: Revista*

*Especializada en Sociología Jurídica y Política*, 8(1), 107-139.

Serna, A. (2010). Línea del tiempo de las ciencias computacionales. *Lámpsakos*,

(3), 86-94.

Valderrama, D. (2018). El acceso a internet como derecho fundamental: caso

costarricense y su viabilidad en Colombia. *Novum Jus: Revista*

*Especializada en Sociología Jurídica y Política*, 12(2), 165-185.